

LA semana política de A.L.

MARCOS KAPLAN
UNAM

El problema de la **democracia** ocupa un lugar cada vez más decisivo en la América Latina de hoy, en los debates, los conflictos y los procesos (sociales, ideológicos, políticos). Cuestiones cruciales al respecto son: ¿Qué ha sido y es la democracia en los principales países de la región? ¿Cuáles han sido, son, deberían ser, su contenido y su alcance, su vigencia real y su importancia práctica? ¿Por qué la democracia es destruida en algunos países, y con qué consecuencias, cómo recuperarla si se perdió, cómo defenderla y reforzarla para que ello no ocurra? ¿Qué compatibilidad tiene un régimen más o menos democrático con las implicaciones y consecuencias de la Nueva División Mundial del Trabajo y del modelo de crecimiento neocapitalista tardío y dependiente, por una parte, y con proyectos, movimientos, regímenes que se definen en favor de una alternativa socialista?

La cuestión es más actual que nunca. La limitada "apertura" parece amenazada en Brasil, y ha sido destruida en Bolivia. El pinochetismo pretende institucionalizarse indefinidamente en Chile a partir del plebiscito. La dictadura uruguaya exhibe algunos síntomas de crisis interna. El general Roberto Viola reemplaza al general Jorge Videla en la Presidencia de la República argentina hasta 1984, y quizá por otro trienio.

El recambio presidencial en Argentina parece representar una tentativa de continuidad del proyecto y el régimen vigentes desde marzo de 1976, con algunas adaptaciones tendientes a la mejora de la imagen, la superación de algunos aspectos especialmente negativos y traumáticos, la ampliación de la base social y del consenso político. Esta significación como operación de continuidad adaptativa, parece surgir a la vez de los éxitos y de los fracasos del proyecto. Posibilitando en medida no desdeñable por una crisis a la vez coyuntural y estructural, socioeconómica e ideológico-política, y las limitaciones, errores y frustraciones de los regímenes precedentes y de las principales fuerzas y organizaciones que representan o pretenden representar a clases y grupos populares y medios que integran las mayorías nacionales, el Gobierno militar y su proyecto se imponen, se consolida, y avanza.

A través de métodos de un autoritarismo, un totalitarismo y un terror sin precedentes en la historia argentina, y casi sin comparación con otras experiencias contemporáneas de América Latina, se destruyen o se debilitan considerablemente componentes vitales de la instancia política y del sistema democrático-liberal. Se dan las condiciones para la reinsertión de la economía argentina en la Nueva División Mundial del Trabajo, y para el avance de una versión específica del crecimiento neocapitalista tardío y dependiente. Se redefine y consolida una fórmula de hegemonía en la que coparticipan el liderazgo militar y una nueva élite oligárquica constituida fundamentalmente por grupos agroexportadores, financieros especulativos e industriales, entrelazados con sectores transnacionales.

El costo socioeconómico y político de esta operación, su contrapartida de fracasos en comparación con algunos de los objetivos proclamados, explican en gran medida la necesidad que el régimen y el nuevo presidente tienen de presentar una imagen de recambio, pero también las coacciones que limitan los contenidos reales de una eventual nueva política y sus posibilidades de éxito.

Las políticas del régimen desde 1976 posibilitan una gigantesca transferencia de resortes y controles económicos, de ingresos y privilegios, hacia empresas transnacionales y grupos minoritarios. Ha implicado

La semana

(CONTINUA DE LA PAGINA CINCO)

tendencias a la desindustrialización y la especulación, al deterioro de considerables sectores empresariales y de las economías regionales, para la mayoría de las clases medias y trabajadoras se ha dado un deterioro violento y masivo de los niveles y posibilidades de empleo e ingreso, de consumo y nivel de vida, de libertad para la participación y la organización, la acción y la creatividad, en lo social, lo cultural y lo político. En lo cultural, científico y técnico, el retroceso no tiene precedentes, y ha contribuido al éxodo de un número incalculado de intelectuales, profesionales, investigadores y mano de obra calificada.

El fracaso de la política económica y social se manifiesta recientemente en síntomas de grave crisis: estancamiento del producto bruto interno global, baja del p.b.i. por habitante y del p.b.i. industrial; desplome de gran número de entidades bancarias y financieras; oleada de quiebras; inflación incontrolada; escalada de la deuda externa; drenaje de divisas hacia el exterior, desequilibrio de la balanza de pagos. El presidente Viola recibe en herencia la mayor crisis económica de la historia argentina, fruto de la política de tierra arrasada del ministro de Economía José Martínez de Hoz.

Pese a los impactos paralizantes y destructivos del terror de Estado y la represión generalizada, del retroceso general y la crisis en todos los niveles, el ascenso del nuevo presidente coincide con una cierta reactivación de las presiones y demandas de grandes fuerzas de todo tipo: empresariales, laborales, políticas, culturales, defensoras de los derechos humanos. Estas fuerzas que sería arduo descalificar como subversivas, se vuelven difíciles de anular o controlar. Se difunden las actitudes y los comportamientos de insatisfacción, escepticismo, indiferencia y desconfianza hacia el Gobierno y sus promesas,

mientras desde todos los principales sectores se reclaman medidas reales de superación de la situación actual. El Gobierno ve reducidas al mínimo su legitimidad y consenso, sus apoyos y espacios políticos; y ensanchada crecientemente la brecha que los separa de la sociedad civil.

Se explican así, por una parte, las medidas que el general Viola sugiere como prefiguración de su política, pero también la lentitud y vaguedad de las mismas, y las previsibles dificultades para su cumplimiento. Se promete la rectificación de la política económica Martínez de Hoz; la reactivación de la economía; la regulación del mercado cambiario, y el reajuste de un peso sobrevaluado que ya se ha cumplido; el ataque a las causas de la inflación; la reducción de las tasas de interés y la extensión de los plazos de financiamiento; la protección a la industria local contra la competencia extranjera; la superación de la crisis financiera y de la marejada de quiebras empresariales; el mejoramiento del empleo y del ingreso.

En lo político, el presidente Viola subraya que no viene a "presidir la liquidación del proceso" iniciado en marzo de 1976, sino a lograr "una solución política definitiva y no una mera salida, que derive en una mera frustración". Se mantendrán en lo sustancial las líneas trazadas en marzo de 1976, sobre todo en la lucha contra la subversión. Al mismo tiempo, se promete la apertura política "hacia un Estado de derecho", "una democracia estable, republicana, representativa y federal"; leyes que regulen la actividad de los partidos políticos siempre que sean representativos. Se desea una armónica relación entre Estado, capital y trabajo, reconociéndose el sacrificio de los trabajadores en los últimos 5 años y los abusos de ciertos grupos económicos.

Una política de apertura en Argentina (y eventualmente en otros regímenes similares), aún limitada y ambigua, amenaza con frustrarse por una serie de factores y circunstancias, ante todo, los que corresponden a dos líneas opuestas pero convergentes. Por una parte, la propia naturaleza y la trayectoria y resultados de los 5 años de régimen imponen restricciones y compromisos: crean la hostilidad hacia toda flexibilización por parte de los dirigentes, grupos e intereses que han coparticipado en las acciones y los beneficios de la represión y el saqueo, los abusos de todo tipo, la acumulación sin precedentes de poderes, privilegios e ingresos.

Por otra parte, la reactivación de fuerzas y tendencias de oposición, crítica y cambio, más o menos representativas de grupos mayoritarios, reducen la credibilidad de las promesas y expectativas creadas por el nuevo presidente y el Gobierno en general; amenazan con desbordamientos y desequilibrarlos. Al mismo tiempo, ello refuerza los temores de los sectores más duros y comprometidos con los procesos y excesos del último quinquenio, temerosos de "juicios de Nuremberg", pérdida de privilegios, recuperación de alternativas excesivamente democráticas, zantes, nacionalpopulistas o socialistas; los induce a reducir aún más los alcances de la apertura apenas esbozada, o a destruir su mera posibilidad.

Los márgenes de acción del nuevo presidente y su equipo son estrechos, y amenazados de erosión por fuerzas múltiples. El análisis de este proceso, y de las manifestaciones específicas del mismo que se dieron o pueden darse en otros regímenes similares, requiere más espacio y detalle, y se retomará en siguientes entregas de esta **Semana Política**.